

AI Index: AMR 19/03/96

EXTERNO - NO PUBLICAR ANTES DEL 24 DE ENERO  
DIRIGIDO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN BRASILEÑOS

**BRASIL: AMNISTÍA INTERNACIONAL TEME POR LA SEGURIDAD DE LAS  
COMUNIDADES INDÍGENAS DESPUÉS DEL DECRETO BRASILEÑO SOBRE LAS  
TIERRAS INDÍGENAS**

Amnistía Internacional advirtió hoy que la seguridad de muchas comunidades indígenas corría peligro debido a un decreto que amenaza las actuales demarcaciones de las tierras indígenas.

«El último decreto tiene todos los ingredientes para la tragedia. Al arrojar dudas sobre la demarcación de más de 344 tierras indígenas, el gobierno ha abierto el camino para su invasión. En el pasado, las consecuencias de este tipo de hechos han sido matanzas, homicidios selectivos, secuestros, amenazas y agresiones a los indígenas», dijeron los representantes de Amnistía Internacional que visitaron hoy la embajada de Brasil en Londres para plantear las preocupaciones de la organización.

Desde la aprobación del decreto, el 8 de enero de 1996, ha habido varias noticias de nuevas invasiones de tierras indígenas. En el pasado, los políticos locales sin escrúpulos y los intereses económicos existentes en muchos estados, a menudo respaldados por las autoridades estatales, han estimulado la invasión de tierras indígenas por colonos, mineros y madereros, aprovechando cualquier duda sobre el proceso de demarcación. La consecuencia han sido enfrentamientos violentos y homicidios. Las autoridades, a todos los niveles, no han protegido los derechos humanos fundamentales de los miembros de los grupos indígenas ni han entregado a la justicia a los responsables de tales agresiones.

Aunque Amnistía Internacional no toma partido sobre disputas territoriales, esta organización de derechos humanos ha hecho campaña para denunciar los abusos contra los derechos humanos que han sufrido las comunidades indígenas de Brasil en los últimos años por parte de quienes desean sus tierras y los recursos que hay en ellas, que con frecuencia actúan con el consentimiento o la complicidad oficial. Amnistía Internacional ha solicitado en repetidas ocasiones a las autoridades de todos los niveles que pongan fin a la impunidad casi universal de los homicidios, las agresiones y las amenazas contra los miembros de comunidades indígenas.

Cifras no definitivas indican que, durante los últimos cinco años, al menos 123 miembros de grupos indígenas han sido asesinados por miembros de la población no indígena en disputas por la tierra. Prácticamente nadie ha sido entregado a la justicia por estos homicidios. Por ejemplo, hasta la fecha no se ha juzgado a nadie por la matanza de 14 miembros de la tribu Ticuna en el Amazonas en 1988, ni por la matanza de 14 miembros de la aldea yanomami de Haximu, en la frontera entre Brasil y Venezuela en 1993.

## INFORMACIÓN GENERAL

Tras un profundo estudio sobre el terreno, Amnistía Internacional publicó un informe en 1993 (+) cuya conclusión fue que los grupos indígenas corrían más peligro cuando había duda sobre la demarcación de sus tierras. En aquel momento la organización afirmó que «por no mediar rápidamente en las disputas entre la comunidad indígena y no indígena, el Estado ha dejado a los grupos indígenas en una situación aún más vulnerable ante el aumento de la violencia contra ellos.»

La investigación de Amnistía Internacional ha mostrado que los grupos indígenas aislados son particularmente vulnerables a estos ataques. Entre estos grupos aislados cuya seguridad el nuevo decreto pone aún más en peligro están los urue-wau-wau, los canoé, los akunsu, los kassupá y los jururei en Rondônia, así como los korubu en el Amazonas, algunos de los cuales ya han sido blanco de abusos.

En marzo de 1995, el secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, planteó al gobierno federal en Brasília la necesidad de establecer salvaguardias para la integridad física de las comunidades indígenas, y medidas para combatir la impunidad de las agresiones de que éstas son objeto. Altos cargos del Ministerio de Justicia se comprometieron firmemente a que los derechos fundamentales de los pueblos indígenas garantizados en el Artículo 231 de la Constitución no se verían modificados, y que las tierras indígenas demarcadas no serían revisadas. Sin embargo, según el nuevo decreto, incluso las tierras indígenas que han llegado a la etapa final de demarcación, la aprobación presidencial (*homologação*), tras un proceso que a menudo ha costado vidas, quedan ahora abiertas a disputa y revisión.

Según la Constitución brasileña de 1988, en octubre de 1993 las 544 zonas indígenas de Brasil debían estar demarcadas, registradas y garantizadas. En la actualidad hay 210 plenamente registradas, y por tanto aparentemente aseguradas contra una revisión. Sin embargo, el nuevo decreto pone otras 344 zonas, incluidas las ya demarcadas, en peligro de disputa y revisión.

El Foro Nacional para la Defensa de los Derechos Indígenas —agrupación de comunidades indígenas y organizaciones no gubernamentales brasileñas— ha pedido a la Procuraduría General de la República que impugne la constitucionalidad del decreto 1.775/96 ante el Tribunal Supremo, argumentando que viola el derecho inalienable de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales, garantizado por el Artículo 231 de la Constitución.

(+) «Nosotros somos la tierra: La lucha de los pueblos indígenas de Brasil»  
ÍNDICE AI: AMR 19/32/92/s, enero 1993.

Nota a los redactores:

También visitan hoy la embajada de Brasil en Londres representantes de las organizaciones no gubernamentales OXFAM y Survival International.